

Combate a la corrupción

Combatir la corrupción en la sociedad chilena requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales y jurídicas como los factores culturales que permiten su proliferación. Un aspecto clave al respecto es el fortalecimiento institucional, esto es, la existencia de instituciones sólidas, independientes y transparentes. Estas deben ser efectivas en la prevención y sanción de prácticas corruptas y, para ello, independientes del poder político y económico.

Paralelamente, resulta crucial aumentar la trazabilidad y claridad en los procesos gubernamentales. Esta tarea puede valerse del uso de tecnologías para hacer públicos los contratos, licitaciones y movimientos financieros del Estado en plataformas accesibles para todos los ciudadanos. La Ley de Transparencia, ya existente, puede ser reforzada para asegurar que el acceso a la información sea más amplio y los organismos respondan con mayor rapidez a las solicitudes ciudadanas.

Asimismo, es necesario seguir perfeccionando el marco legal que regula la corrupción, línea de acción que podría incluir el endurecimiento de las sanciones por actos corruptos, como el soborno, e implantar reformas judiciales que aseguren que los jueces y fiscales sean verdaderamente independientes y capaces de actuar sin presiones externas. Avanzar en la transparencia en el nombramiento y la evaluación de aquellos también parece vital en este campo.

Con todo, la lucha contra la corrupción no puede nunca limitarse solo a las leyes y medidas administrativas; requiere primeramente y en su mismo núcleo de un imprescindible cambio cultural. Programas educativos centrados en la ética y el civismo, desde la educación básica hasta la universitaria, ayudarían a fomentar una ciudadanía que valore la integridad. Como complemento y continuidad de este esfuerzo formativo es fundamental que los sectores empresariales y gubernamentales establezcan principios de acción claros y códigos de ética, considerando la capacitación constante para todos los miembros de esas organizaciones y la aplicación efectiva de sanciones en caso de incumplimiento.

Este conjunto de medidas, si se efectúan de manera efectiva y coordinada, podrían contribuir significativamente a la reducción de la corrupción en Chile, promoviendo una cultura ética y ayudando a restaurar la alicaída confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Sin desmedro alguno de lo expuesto, tres aspectos esenciales, hasta aquí no mencionados, han de ser tenidos en cuenta. Se trata del aporte insustituible que en el plano formativo corresponde realizar a las familias; aquel que urgentemente debe obrar el Estado ante el narcotráfico y la delincuencia criminal, y la convicción ejemplar con la que han de comportarse los líderes de la sociedad. ¿Cuán preparados y dispuestos están actualmente cada uno de estos estamentos para cumplir sus respectivas responsabilidades en este ámbito?

Entre la miopía y la banalidad

Magdalena Browne
Decana Escuela de Comunicaciones y Periodismo, UAI



En medio de la ya conocida desafección política de la ciudadanía y la percepción de crisis del sistema político, la última encuesta CEP siembra un pequeño brote de esperanza: un 67% de las personas declara estar en algún grado interesada en las próximas elecciones municipales, ocho puntos por sobre lo declarado en 2016.

¿Qué tan profundo y sincero es este interés? No lo sabemos, pero, con una cuota de optimismo, podríamos soñar que estos próximos comicios fueran una oportunidad para romper -aunque sea momentáneamente- parte de la actual inercia política y estrechar la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía. Después de todo, estas elecciones tratan sobre las problemáticas que afectan cotidianamente a las personas: seguridad, salud y educación. De hecho, en momentos de inmovilismo del sistema político -incluyendo la renovación de sus liderazgos-, la cercanía y la capacidad de gestión "en terreno" de algunos alcaldes han sido destacadas por la opinión pública. Según la misma encuesta CEP, solo cuatro figuras políticas nacionales reciben una evaluación positiva "neta" (esto es, una evaluación superior a la negativa); tres de ellos ejercen actualmente cargos en el ámbito local o regional: la alcaldesa Evelyn Matthei; el alcalde de La Florida, Tomás Vodanovic, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Sin embargo, nuevamente, los partidos políticos corren el riesgo de desaprovechar esta oportunidad que proporcionan los próximos comicios locales. Frente a su mala imagen, no han logrado desplegar las estrategias adecuadas. Más aún, sus respuestas son inocuas o incluso profundizan el problema.

Al menos eso se infiere de la guerrilla de acusaciones constitucionales ejercidas por los partidos políticos en las últimas semanas, que buscan combatir la delincuencia con artilugios ineficaces, improvisados y reiterados. Estas disputas solo refuerzan la disposición negativa de la ciudadanía hacia la política. Con esa mirada miope, los partidos políticos proyectan un horizonte difuminado que les impide articular propuestas de largo alcance y contundentes frente a los problemas que desde hace ya un buen tiempo la ciudadanía reclama una pronta solución.

Peor aún, parte importante de los candidatos que aspiran a ocupar puestos locales reniegan de sus colectividades. Calles de todo Chile ya han empezado a ser inundadas con carteles propagandísticos de los candidatos a alcaldes y concejales. La capacidad de que los votantes retengan nombres y listas es difícil, pues en muchos de ellos no hay ninguna "marca" ni "pista" distintiva que muestre su filiación política. En este caso, no solo no se entrega información básica, sino que se presume que la política es una gesta individual. Cambiar la denotada imagen que tienen los chilenos sobre los partidos políticos no pasa por ocultarlos, sino por construir una política en serio, más contundente, con menos *shows*, estridencias y banalidad.

Combate a la corrupción

Álvaro Pezoa
Director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes



Combate a la corrupción en la sociedad chilena requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales y jurídicas como los factores culturales que permiten su proliferación. Un aspecto clave al respecto es el fortalecimiento institucional, esto es, la existencia de instituciones sólidas, independientes y transparentes. Estas deben ser efectivas en la prevención y sanción de prácticas corruptas y, para ello, independientes del poder político y económico.

Paralelamente, resulta crucial aumentar la trazabilidad y claridad en los procesos gubernamentales. Esta tarea puede valerse del uso de tecnologías para hacer públicos los contratos, licitaciones y movimientos financieros del Estado en plataformas accesibles para todos los ciudadanos. La Ley de Transparencia, ya existente, puede ser reforzada para asegurar que el acceso a la información sea más amplio y los organismos respondan con mayor rapidez a las solicitudes ciudadanas.

Asimismo, es necesario seguir perfeccionando el marco legal que regula la corrupción, línea de acción que podría incluir el endurecimiento de las sanciones por actos corruptos, como el soborno, e implantar reformas judiciales que aseguren que los jueces y fiscales sean verdaderamente independientes y capaces de actuar sin presiones externas. Avanzar en la transparencia en el nombramiento y la evaluación de aquellos también parece vital en este campo.

Con todo, la lucha contra la corrupción no puede nunca limitarse solo a las leyes y medidas administrativas; requiere primeramente y en su mismo núcleo de un imprescindible cambio cultural. Programas educativos centrados en la ética y el civismo, desde la educación básica hasta la universitaria, ayudarían a fomentar una ciudadanía que valore la integridad. Como complemento y continuidad de este esfuerzo formativo es fundamental que los sectores empresariales y gubernamentales establezcan principios de acción claros y códigos de ética, considerando la capacitación constante para todos los miembros de esas organizaciones y la aplicación efectiva de sanciones en caso de incumplimiento.

Este conjunto de medidas, si se efectúan de manera efectiva y coordinada, podrían contribuir significativamente a la reducción de la corrupción en Chile, promoviendo una cultura ética y ayudando a restaurar la alicida confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Sin desmedro alguno de lo expuesto, tres aspectos esenciales, hasta aquí no mencionados, han de ser tenidos en cuenta. Se trata del aporte insustituible que en el plano formativo corresponde realizar a las familias; aquel que urgentemente debe obrar el Estado ante el narcotráfico y la delincuencia criminal, y la convicción ejemplar con la que han de comportarse los líderes de la sociedad. ¿Cuán preparados y dispuestos están actualmente cada uno de estos estamentos para cumplir sus respectivas responsabilidades en este ámbito?

LT latercera.com

Declaración de intereses en
www.grupocopesa.cl/declaracion
Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores
en sucursal virtual:
<http://sucursalvirtual.latercera.com>



SANTIAGO DE CHILE |
AÑO 72

SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1400 caracteres con espacios a:

Email: correo@la.tercera.com
Avenida Apoquindo 4660, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

ESPACIO ABIERTO

Un año de terror, venganza y deshumanización

Javier Sajuria
Profesor de Ciencia Política, Queen Mary University



El año que ha transcurrido desde el 7 de octubre de 2023 es de los peores en la historia reciente de Medio Oriente. Desde los más de 1.200 asesinatos cometidos por Hamas en ese fatídico 7 de octubre, en la peor catástrofe sufrida por el pueblo judío desde el Holocausto, hasta las más de 40.000 personas asesinadas por Israel, en su mayoría niños y mujeres, en el año que ha seguido.

Como descendiente de palestinos, siempre me fue complejo identificarme como uno. No

solo no hablo el idioma y no mantengo contacto con mis familiares en la zona, sino que además nunca he sido parte de la extensa y activa comunidad palestina en Chile. Mi mayor conexión, hasta ahora, ha sido la comida, traspasada por mi abuela, quien, a pesar de haber sido chilena, preparaba las mejores hojas de parra que he probado.

Asimismo, a través de gente muy querida, he conocido de cerca la violencia del antisemitismo y cómo afecta día a día a millones de judíos en el mundo. No es solo una forma de racismo, sino que esconde teorías conspirativas que deshumanizan a un pueblo y sus tradiciones, además de poner en riesgo sus vidas y seguridad.

Digo esto porque la masacre contra el pueblo palestino, contra mi pueblo, ha puesto en duda mi reticencia a identificarme como uno. Me ha hecho reafirmar un legado que no elegí pero que no puedo ignorar. Cuesta no ver a mis propios hijos en las caras de los niños de Gaza; al fin y al cabo, comparten los mismos rasgos e historia. Y también se vuelve tan evidente por qué millones de judíos defienden a Israel a pesar de sus atrocidades: ven en el proyecto de Israel un espacio seguro que la historia les ha negado por siglos. Eso, en cierta forma, es

también la tragedia del pueblo palestino, que hoy no tiene un espacio en el mundo donde sentirse seguro.

Hoy, los palestinos no tienen (o tenemos) voz ni humanidad. Al usar la cantinela de los escudos humanos, el gobierno de Israel ha convertido a toda la población de Gaza en terrorista; o en defensora de terroristas; o, al menos, en personas que decidieron vivir en los mismos barrios que los terroristas, o que llevaron a sus hijos al hospital cuando había un terrorista cerca. En fin, se entiende el punto: los palestinos ya no son más personas con derechos y son terroristas consumados o potenciales; mejor matarlos ahora que después, pensarán algunos que se creen ese cuento. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Netanyahu en Gaza, y poco a poco lo ha llevado adelante en Cisjordania y el Líbano. Su doctrina es la del castigo colectivo y la deshumanización.

A un año del 7 de octubre, recordamos las vidas de quienes fueron masacrados por el terrorismo de Hamas y de quienes viven como sus prisioneros. Esos rehenes que parecen ser olvidados por Netanyahu y su banda. Y también sufrimos a los miles de inocentes que han muerto a manos de una venganza cruel, despiadada y desproporcionada.